

Concepción, catorce de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTO, OIDOS Y TENIENDO PRESENTE:

I.- ANTECEDENTES GENERALES

1.- DEMANDA:

En este proceso, **RIT O-981-2022** del Ingreso del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Procedimiento de Aplicación General, comparecieron doña **NANCY ELIANA ARAVENA ESPINOZA**, egresada de enseñanza media, domiciliada en la comuna de San Pedro de la Paz, calle Las Murtas N°295, sector Arboleda San Pedro; don **PATRICIO ABRAHAM CAMPOS ZAPATA**, contador, con domicilio en la comuna de Tomé, calle Sargento Aldea N°660, sector Rafael y don **IVAN ANDRES FREIRE SUAZO**, técnico en trabajo social, domiciliado en Talcahuano, calle Ancahual N°777, quienes interpusieron demanda por declaración de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones en contra de su ex empleadora **DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DEL BIO BIO, EX Intendencia Regional-FISCO DE CHILE** representada legalmente por su Delegada Presidencial Daniela Dresdner Vicencio y procesalmente representada por el Abogado Procurador Fiscal del **Consejo de Defensa del Estado** don Georgy Schubert Studer, ambos con domicilio, para estos efectos en Concepción, calle Barros Arana N°1.098, Oficina 1.501, piso 15, fundada en las siguientes consideraciones:

1.1.- Antecedentes de la relación laboral

Indican que ingresaron a prestar servicios bajo subordinación y dependencia para la Intendencia Regional del Biobío, que luego pasó a ser la Delegación Presidencial Regional del Biobío, en para prestar servicios en el Programa de Inversión en la Comunidad (PIC), el cual tiene por propósito la generación de empleos de emergencia y en su implementación mitigar los índices de desempleo en zonas determinadas, financiando obras o acciones en diversas localidades, mediante el uso intensivo de mano de obra que se contratan para tales efectos, programa que el Estado ha desarrollado durante décadas, a través de diversos Ministerios y organismos como las Intendencias Regionales, actualmente Delegaciones Presidenciales.

Agregan que para los efectos del cumplimiento de dicho programa fueron contratados para cumplir la función de fiscalizadores, todos los cuales se les habría pagado la misma suma, y pese a tener todas las características y elementos propio de un contrato de trabajo, especialmente la “dependencia y subordinación”, se les habría hecho suscribir un documento titulado “convenio a



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

honorarios a suma alzada. Servicio de Gobierno Interior–cuenta complementaria”.

Respecto de doña Nancy Aravena Espinoza, dice que ingresó a prestar servicios a partir del 1° de mayo de 2018, renovándose la contratación en forma sucesiva en los términos ya indicados hasta el 31 de octubre del año 2022, siendo terminado el último contrato en forma anticipada por la demandada el 30 de abril del mismo año. En total, los servicios se habrían extendido por 4 años.

En cuanto a don Patricio Campos Zapata, ingresó a prestar servicios para la demandada a partir del 22 de mayo de 2018 y hasta la misma fecha de la anterior trabajadora. En total, los servicios se habrían extendido por 3 años, 11 meses y 8 días.

Por último, en el caso de don Iván Freire Suazo, habría ingresado a prestar servicios a partir del 1° de agosto de 2019, renovándose la contratación en forma sucesiva hasta la misma fecha indicada precedentemente. En total, los servicios se habrían extendido por 2 años y 9 meses.

Acorde estos antecedentes y el detalle que contiene la respectiva demanda, expresa que sus funciones eran las de fiscalizadores en el Programa ya referido, estando sujetos a control y cumpliendo las órdenes emanadas de las jefaturas directas, no ajustándose en los hechos a una prestación de servicios de carácter civil excediendo con ello las facultades contenidas en el artículo 11 de la Ley 18.834, por lo que piden que se declare que la prestación de servicios que hicieron a la demandada se hizo bajo subordinación y dependencia en los términos regulados en el artículo 7° del Código del Trabajo.

1.2.– Término de la relación laboral

Sostienen que la demandada sin justificación real alguna habría dado por terminada en forma anticipada la relación laboral a partir del 30 de abril de 2022, sin que se haya expresado causal legal alguna conforme lo regulan los artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo, por lo que pide que así se declare por el tribunal.

1.3.– Peticiones concretas formuladas al tribunal

En mérito de lo expuesto, solicita acoger la demanda y declarar lo siguiente:

1°) Que, la relación de prestación de servicios que los unió con la demandada fue una relación laboral regida por el Código del Trabajo.



2º) Que, el despido del que fueron objeto el 30 de abril de 2022 fue injustificado.

3º) Que, se debe sancionar a la demandada ordenando pagar las remuneraciones y demás prestaciones del contrato hasta que se produzca la convalidación.

4º) Que, la demandada debe enterarle las cotizaciones previsionales, de salud previsional y de cesantía de todo el tiempo trabajado.

Lo anterior, entre otras prestaciones que especifica en la demanda, con expresa condenación en costas.

2.- CONTESTACIÓN:

La parte demandada a través del Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado contestó la demanda en tiempo y forma en los términos expuestos en el correspondiente escrito, los que a continuación se expone en forma resumida.

2.1.- Falta de legitimación pasiva y activa

La demandada hace dicha alegación de fondo, pidiendo rechazar la demanda interpuesta por los actores por cuanto la relación contractual que la unía con los demandantes era de carácter civil y sujeta al estatuto jurídico especial regido por el artículo 11 de la Ley 18.834, y por ende no se da la relación de subordinación y dependencia regulada en el Código del Trabajo, no existiendo por ende la calidad de trabajador en esos términos y la de empleador, por lo que a su respecto la demanda carece de legitimidad pasiva y los demandados carecen a su vez de legitimidad activa para emplazar a la Delegación Presidencial en los términos indicados en el libelo.

Agrega que, la acción deducida por los demandantes en su calidad de funcionarios de la administración pública a honorarios, y no de trabajador en los términos del artículo 3º del Código del Trabajo en contra del Servicio demandado en su calidad de empleador, definido por el mismo precepto legal, resulta inaplicable toda vez que no existe ni existió una relación laboral en los términos regulados por el Código del Trabajo, sino que medió entre las partes un contrato civil de prestación de servicios a honorarios.

2.2.- En subsidio, controvierte hechos, alegaciones y defensas.

La demandada contestando la demanda, primeramente hace alusión a los hechos narrados en la misma por los demandantes, para luego controvertir y



negar los siguientes: 1) La existencia de un vínculo contractual de tipo laboral como el establecido en el Código del Trabajo entre el actor y la demandada y que el contrato den prestación de servicios suscrito entre ambas partes haya sido uno que encubría un relación laboral en dichos términos; 2) La existencia de un vínculo de subordinación y dependencia del actor para con el Servicio público y de los elementos de los cuales podría presumirse su existencia, esto es, los índices de laboralidad que señala en su demanda; 3) La existencia de un despido. No hubo despido laboral y obviamente, menos puede ser nulo; por lo mismo nada hay que convalidar, y por ende, nada se adeudaría; 4) Que se adeuden las sumas que el actor señala en su demanda. Menos, que se adeuden reajustes e intereses.

Alega, además, la inexistencia del contrato de trabajo y la de vínculo laboral, siendo por ende improcedente la acción incoada al carecer de derecho para obtener la satisfacción de las pretensiones contenidas en ella, teniendo por reproducidos los argumentos vertidos en el acápite de excepción de falta de legitimidad activa y pasiva, reconociendo la efectividad de la vigencia de la contratación bajo la modalidad a honorarios de los demandantes para desempeñarse para la demandada en las fechas planteadas en el libelo, aludiendo para ello a las resoluciones administrativas suscritas por la autoridad pública, mediante las cuales se aprobaron los contratos a honorarios respectivos, estableciendo cada una de ellas su vigencia el pago de dichos contratos mediante honorarios enterados en cuotas, y la determinación de sus funciones, haciendo una breve mención de cada uno de ellos.

En consecuencia niega que, sus ingresos correspondieran a una remuneración, sino más bien a los honorarios pactados.

Refiere que, luego de la lectura de las respectivas resoluciones, quedaría de manifiesto que los servicios que prestaron los demandantes tendrían el carácter de específicos, rigiéndose sus derechos y obligaciones por un contrato a honorarios y no por uno de trabajo, reiterando que, en atención a lo dispuesto en los incisos 1° y 2° del artículo 11 del Estatuto Administrativo, basta con que se cumpla con una de las condiciones allí descritas esto es laborales accidentales o cometidos específicos, para que la autoridad esté legalmente habilitada para contratar sobre la base de honorarios, como habría ocurrido en la especie.

Luego plantea que, los demandantes se habrían desempeñado en el Programa de Inversión en la Comunidad, cumpliendo allí las funciones de fiscalizadores, es decir cometidos específicos.



Reitera que, de acuerdo a lo expresado, durante todo el tiempo de prestación de servicios, serían aplicables para los actores las normas de la ley 18.834 en virtud de las facultades conferidas al órgano de la administración pública por el artículo 11 del mismo cuerpo normativo ya aludido latamente, y lo prescrito en el propio contrato de prestación de servicios y en subsidio de lo no regulado allí las normas del arrendamiento de servicios del Código del Trabajo.

En suma, las pretensiones de los demandantes implicarían un desconocimiento de lo convenido en pleno conocimiento de ambas partes en su momento, sino que claramente intentaría obtener un enriquecimiento injusto y sin causa, al ser improcedentes las pretensiones perseguidas por los demandantes, entre otras, las cotizaciones que se adeudarían por todo el periodo trabajado hasta la supuesta convalidación, la indemnización por el supuesto despido, y sanción del artículo 162 del Código del Trabajo, y así lo habría reconocido la Excelentísima Corte Suprema, en las respectivas sentencias que cita.

En efecto el estatuto Administrativo excluye todo tipo de indemnizaciones por causa del término de la relación que vincula a un funcionario con la Administración Pública, negando en consecuencia la procedencia de las demás prestaciones enumeradas en la demanda.

En cuanto a la nulidad del despido sería improcedente, por cuanto al no ser contrato de trabajo sino prestación de servicios no estaría obligado el servicio a retener suma alguna por este concepto y menos aún enterarlas en las respectivas entidades previsionales. Y cita al respecto jurisprudencia que avalaría su tesis.

Por tanto en virtud de los hechos, argumentos y normas ya referidas solicita tener por contestada la demanda y en definitiva rechazarla en todas sus partes con costas.

Hace presente además, la imposibilidad que tenía el servicio de contratar al actor bajo las normas del Código del Trabajo por el principio de legalidad al cual deben estar sujetos los servicios públicos y el de legalidad presupuestaria.

3.- HECHOS DE LA CAUSA

La audiencia preparatoria se celebró con la presencia de ambas partes, quienes fueron llamadas a conciliación, la que no se produjo.

En razón de lo anterior se procedió a recibir la causa a prueba, por lo cual se fijaron los hechos a probar en los términos que pasan a exponerse a



continuación:

1.- Efectividad de concurrir en la especie los supuestos de hecho que configurarían la relación laboral respecto de la demandada con cada uno de los demandantes de autos. En su caso, estipulaciones de dicha vinculación, fecha de inicio y termino de la misma.

2.- Para el evento de que el punto 1 fuere efectivo determinación de las circunstancias del término de la relación laboral y cumplimiento de las formalidades legales según sea el caso.

3.- Determinación del monto de última remuneración mensual respecto de cada uno de los actores en los términos del artículo 172 del Código del Trabajo.

4.- Efectividad de adeudarse las indemnizaciones y/o prestaciones reclamadas por los actores en su libelo.

5.- Efectividad de concurrir en la especie los supuestos de hecho que configuran la acción de nulidad del despido, alegada por los demandantes en su libelo.

6.- Efectividad de concurrir en la especie los supuestos de hecho que configuren la excepción de falta de legitimación activa y pasiva alegada por la demandada de autos.

4.- PRUEBA RENDIDA EN EL JUICIO

4.1.- DEMANDANTE

-Documental:

a).- Respecto de doña NANCY ARAVENA ESPINOZA:

1.- Carta de 25 de abril de 2022 por término contractual de la Delegada Presidencial Regional del Biobío a la demandante (Tlp2).

2.- Convenios entre la demandante y la Intendencia Regional- Delegación Presidencial. Resolución (E) RA N° 245/1027/2020 de 26/Jun/2020, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y la actora (Tlp3-4) y el Texto del Convenio de 16/Ene/2019 (Tlp5-10); Resolución (E) RA N° 245/1030/2020 de 26/Jun/2020, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y la actora (Tlp11-12). y el Texto del Convenio de 01/Abr/2019 (Tlp13-18); Resolución (E) RA N° 245/1031/2020 de 26/Jun/2020, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y la actora (Tlp19-20) y el Texto del Convenio de 01/Jul/2019 (Tlp21-26); Resolución (E) RA N°



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

245/1697/2020 de 03/Dic/2020, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y la actora (Tlp27-28) y el Texto del Convenio de 01/Ene/2020 (Tlp29-34); Resolución (E) RA N° 245/1699/2020 de 03/Dic/2020, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y la actora (Tlp35-36) y el Texto del Convenio de 23/Mar/2020 (Tlp37-42); Resolución (E) RA N° 245/1701/2020 de 03/Dic/2020, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y la actora (Tlp43-44) y el Texto del Convenio de 01/May/2020 (Tlp45-50); Resolución (E) RA N° 245/1702/2020 de 03/Dic/2020, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y la actora (Tlp51-52) y el Texto del Convenio de 01/Jul/2020 que transcribe (Tlp53-58); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y la actora, de 22/Ene/2021 (Tlp59-63); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y la actora, de 26/Feb/2021 (Tlp64-68); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y la actora, de 15/Mar/2021 (Tlp69-73); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y la actora, de 29/Jul/2021 (Tlp64-68); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y la actora, de 15/Mar/2021 (Tlp69-78); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y la actora, de 26/Feb/2021 (Tlp64-68); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y la actora, de 02/Ene/2022 (Tlp79-83); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y la actora, de 18/Feb/2022 (Tlp84-88); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y la actora, de 01/Mar/2022 (Tlp89-93); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y la actora, de 07/Mar/2022 (Tlp94-98);

3.- Informe de Gestión del Programa Inversión en la Comunidad Región del Biobío de Febrero de 2021 del área fiscalizada por la actora (Tlp100), de Mayo de 2021 del área fiscalizada por la actora (Tlp101); de Julio de 2021 del área fiscalizada por la actora (Tlp102); de agosto de 2021 del área fiscalizada por la actora (Tlp103); de Septiembre de 2021 del área fiscalizada por la actora (Tlp104-105); de Noviembre de 2021 del área fiscalizada por la actora (Tlp106); de Febrero de 2022 del área fiscalizada por la actora (Tlp107-108); de Marzo de 2022 del área fiscalizada por la actora (Tlp109-110), y de Abril de 2021 del área fiscalizada por la actora (Tlp111-112);

4.- Informe del Servicio de Impuestos Internos y Boletas emitidas a la demandada: de 2018 (Tlp114) y boletas (de mayo a diciembre de 2018



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

(Tlp115-118); de 2019 (Tlp119) y boletas (de enero a diciembre de 2019 (Tlp120-125); de 2020 (Tlp126) y boletas (de enero a diciembre de 2020 (Tlp127-132); de 2021 (Tlp133) y boletas (de enero a diciembre de 2021 (Tlp134-139) y de 2022 (Tlp140) y boletas (de enero a abril de 2022 (Tlp141-142);

5.- Cometido de Fiscalizadores de la actora a la Jefe de Proyectos y Fiscalización de 2020 (Tlp143-154);

6.- Informes de Supervisión de 2019 de la actora al Coordinador Regional del Programa de Inversión en la Comunidad, Intendencia Región del Biobío (Tlp155-162), (Tlp1-2), (Tlp30-32);

7.- Documentos redactados por la actora para la firma de jefaturas a diversos entes ejecutoras del Programa en la Región del Biobío de 2019 a 2021 (Tlp3-7), (Tlp10-14), (Tlp33-50);

8.- Informes de Teletrabajo de la actora a su Jefatura de Mayo de 2021 (Tlp8).

9.- Mail de 24/Mar/2022 Sobre Oficios a su Superior Sra. Lorena Moncada (Tlp9);

10.- Informe Técnico de Programa Inversión en la Comunidad de marzo de 2022 del Área de Fiscalización Marzo de 2022 (Tlp15-29).

11.- Planillas de Fiscalización de 07/Abr/2021 de la actora (Tlp51-65).

12.- Mails de o a Nancy Aravena, de diversas fechas con las Jefaturas de la actora de 2022 y archivos adjuntos (Tlp66-73).

13.- Indicaciones Médicos de la demandante durante el período trabajado, en el año 2022 para justificar licencia médica (Tlp73-76);

14.- Fotografía de la Credencial de la actora de la Delegación Presidencial (Tlp77);

15.- Fotografías de los informes de las actividades fiscalizadas por la actora (Tlp78- 93);

16.- Revisión Consolidado de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, fiscalizado por la actora, de 24/Feb/2022 a su Jefatura (Tlp94).

b).- Respecto de don PATRICIO CAMPOS ZAPATA:

17.- Carta de 25 de abril de 2022 por término contractual de la Delegada Presidencial Regional del Biobío al demandante.(Tlp96).

18.- Convenios entre el demandante y la Intendencia Regional- Delegación Presidencial. Resolución (E) RA N° 245/1043/2020 de 26/Jun/2020, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y el actor (Tlp97-98) y el Texto del Convenio de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

01/Abr/2019 (TIIp99-104); Resolución (E) RA N° 245/1016/2020 de 26/Jun/2020, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y el actor (TIIp105-106) y la transcripción del Texto del Convenio de 01/Jul/2019 (TIIp107-112); Resolución (E) RA N° 245/1645/2022 de 04/Mar/2022, que aprueba contrato a honorario entre el Servicio de Gobierno Interior y el actor (TIIp113-114) y la transcripción del Texto del Convenio de 01/Ene/2020 (TIIp115-120); Resolución (E) RA N° 245/1646/2022 de 04/Mar/2022, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y el actor (TIIp121-122) y la transcripción del Texto del Convenio de 01/Mar/2020 (TIIp123-128); Resolución (E) RA N° 245/1648/2022 de 04/Mar/2022, que aprueba contrato a honorario que aprueba contrato a honorarios entre el Servicio de Gobierno Interior y la actora (TIIp129-130) y el Texto del Convenio de 01/Jul/2020 (TIIp131-136); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el demandante, de 22/Ene/2021 (TIIp137-141); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el actor, de 26/Feb/2021 (TIIp142-146); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el demandante, de 15/Mar/2021 (TIIp147-151); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el actor, de 29/Jul/2021 (TIIp153-TPIIIp1); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el demandante, de 02/Ene/2022 (TIIIp2-6); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el actor, de 18/Feb/2022 (TIIIp7-12); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el demandante, de 01/Mar/2022 (TIIIp13-17); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el actor, de 07/Mar/2022 (TIIIp18-20);

19.- Informe del Servicio de Impuestos Internos y Boletas emitidas a la demandada: de 2018 (TIIIp22) y boletas (de mayo a diciembre de 2018 (TIIIp23-26); de 2019 (TIIIp27) y boletas (de enero a diciembre de 2019 (TIIIp28-33); de 2020 (TIIIp34) y boletas (de enero a diciembre de 2020 (TIIIp35-40); de 2021 (TIIIp41) y boletas (de enero a diciembre de 2021 (TIIIp42-47) y de 2022 (TIIIp48) y boletas (de enero a abril de 2022 (TIIIp49-50);

20.- Pauta de Procesos Administrativos Internos de Fiscalización, sin fecha, del Manual de Fiscalización ProEmpleo Región del Bio Bío (TIIIp51-54);

21.- Permiso Único Colectivo al demandante por la Comisaría Virtual solicitada por el Servicio de Gobierno Interior en diversos meses de 19/Oct/2020 (TIIIp55);

22.- Oficio 875 de 10/Sep/2010 la Jefatura de Proyectos y Fiscalización a las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

Unidades Ejecutoras de la Región del Biobío, que debió gestionar el demandante (TIIIp56);

23.- Mails de o a Patricio Campos, de diversas fechas con las Jefaturas del demandante de 2022 y archivos adjuntos con peticiones de autorización de permisos y otros (TIIIp57-60).

24.- Informes de Fiscalización Inicio de Cobertura a unidades ejecutoras gestionadas por el demandante de diversas fechas (TIIIp61-68).

25. Instrucción de Cometido Funcionario de diversas fechas elaborados por el demandante (TIIIp69-72).

26.- Informes de Supervisión del Demandante de 2018 (TIIIp73-76).

27.- Fotografías de los informes de las actividades fiscalizadas por el demandante (TIIIp77-79).

28.- Foto de la credencial del actor otorgada por la Delegación Presidencial (TIIIp80).

c).- Respecto de don IVAN FREIRE SUAZO:

29.- Carta de 25 de abril de 2022 por término contractual de la Delegada Presidencial Regional del Biobío al demandante Y Certificado de carta certificada con que fue comunicada (TIIIp82-83).

30.- Convenios entre el demandante y la Intendencia Regional- Delegación Presidencial. Convenio de 01/Ene/2020 (TIIIp84-88); Convenio de 01/May/2020 (TIIIp89-93); Convenio de 03/Mar/2020 (TIIIp94-98); Convenio de 22/Ene/2021 (TIIIp99-103); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el actor, de 26/Feb/2021 (TIIIp104-108); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el demandante, de 15/Mar/2021 (TIIIp109-113); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el actor, de 29/Jul/2021 (TIIIp114-118); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el demandante, de 02/Ene/2022 (TIIIp119-121 y TIVp1-2); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el actor, de 18/Feb/2022 (TIVp3-8); Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el demandante, de 01/Mar/2022 (TIVp9-13) y Convenio a Honorarios entre Servicio de Gobierno Interior y el actor, de 07/Mar/2022 (TIIIp14-18);

31.- Boletas emitidas a la demandada: Boletas (de agosto a diciembre de 2019 (TIVp19-21); de enero a diciembre de 2020 (TIVp21-27); de enero a diciembre de 2021 (TIVp27-33) y de enero a abril de 2022 (TIVp34-35);

32.- Hojas del Libro de Control de Asistencia, firmado por el demandante entre marzo de 2022 a abril de 2021. (TIVp36-42);



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

33.- Certificado de vigencia laboral de 15 de marzo de 2021, emitido por la Jefe de Administración y Finanzas. (TIVp43).

34.- Mails de o a Iván Freire Suazo, de o a diversas fechas con las Jefaturas del demandante de 2019 a 2022 y archivos adjuntos con peticiones de autorización de permisos y otros. (TIIIp44-59).

35.- Foto de la credencial del actor otorgada por la Delegación Presidencial (TIVp60).

36.- Permisos Único Colectivo al demandante por la Comisaría Virtual solicitada por el Servicio de Gobierno Interior en diversos meses de 7/Sep y 2 y 26 de Octubre, todos de 2020 (TIVp60-63)

d).- Documental común:

37.- Procesos Administrativos Internos de Fiscalización. Manual de Fiscalización Pro Empleo Región del Biobío del Programa de Inversión en la Comunidad. Intendencia (TVP2-4).

38.- Resolución Exenta 662 de 5/Oct/2021 que aprueba Manual de Operaciones para la Ejecución del Programa Inversión en la Comunidad del Departamento Pro empleo de la Subsecretaría del trabajo (TVp5-45).

39.- Transferencias de Recursos a la Intendencia Región del Biobío y Delegación Presidencial del Biobío para financiar gastos de administración y personal del Programa Inversión en la Comunidad, contenidos en los Decretos Exentos N°s 33, de 14/Feb/2020 (TVp46-49), 64, de 20/Abr/2020 (TVp50-53), 85, de 17/Jul/2020 (TVp54- 57), 23, de 22/Ene/2021 (TVp58-62), 36, de 26/Feb/2021 (TVp63-66), 50 de 15/Mar/2021 (TVp67-71), 170, de 28/Jul/2021 (TVp72-75), 297, de 30/Dic/2021 (TVp76-79), 13, de 21/Ene/2022 (TVp80-83) y 27 de 4/Mar/2022 (TVp84-87).

40.- Permisos Único Colectivo a los demandantes por la Comisaría Virtual solicitada por el Servicio de Gobierno Interior entre de diversas fechas de 2020-2021 (TVp88-93);

41.- Correos Electrónicos con instrucciones, órdenes, asignación de tareas colectivas, etc. a los demandantes de esta causa entre los meses de noviembre de 2019 a abril de 2022 (TVp94-190);

42.- Informe de Transparencia Ley 20.285, de Mayo de 2022 donde se registran las nuevas contrataciones a Honorarios en la Delegación Presidencial Región del Biobío (TVp191-199);

43.- Página web con datos de postulación de Cristian Ramírez Henríquez como candidato a diputado, contratado en la Delegación Presidencial



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

<https://interactivo.latercera.com/candidatos-electorales/diputados/distrito-21/cristianalfredo-ramirez-henriquez/> (TVp200);

44.- Página web <https://consejerosregionales.cl/18264> donde figura como candidato a Consejero Regional el Sr Enzo Jecar, que figura dentro del informe de transparencia del N° 42 de la Minuta.

45.- Página Web del candidato a Alcalde en San Pedro de la Paz Luis Islas Cofré en elección 2021:
https://m.facebook.com/luisislasalcaldedesanpedrodelapaz/photos/a.100561165083621/110700350736369/?type=3&_rdr.

-Confesional:

Declaró en la audiencia de juicio en representación de la demandada doña **Paola Cifuentes Monsalve**, RUT: 12.467.260-4.

Su declaración íntegra consta en la respectiva audiencia de juicio.

-Testimonial:

Declararon en juicio bajo juramento y/o promesa de decir verdad los siguientes testigos:

- 1.- Doña Marisol Carmen Inostroza Muñoz, Rut N°13.308.791-5.
- 2.- Don Hernán Alonso Cannobbio Beltrán, Rut 7.696.836-2.
- 3.- Don Primo Antonio Heredia Ruiz, Rut 6.768.296-3.

La declaración íntegra de los testigos consta en el respectivo registro de audio de la audiencia de juicio.

-Exhibición de documentos:

Se solicitó por de los demandantes que la demandada procediera a exhibir los siguientes documentos, diligencia que cumplió a satisfacción de los actores, en los siguientes términos:

- 1.- Convenios suscritos por los demandantes durante todo el período laboral mayo de 2018 a abril de 2022; en el caso de Nancy Aravena como de Patricio Campos y en el caso de Iván Freire de agosto de 2019 a la fecha de término del contrato. Parcialmente exhibido.
- 2.- Informes de Gestión de los demandantes durante todo el período laborado para la Intendencia Regional y su Continuada legal la Delegación Presidencial Región del Biobío. Parcialmente exhibido.
- 3.- Registro de Asistencia de los demandantes durante el período laborado. Parcialmente exhibido.
- 4.- Informe de Funcionarios a Honorarios que sirven en el Programa de Inversión a la Comunidad de la Delegación Presidencial Región del Biobío al mes de julio a septiembre de 2022 conforme al informe de transparencia N° 42 de la



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

Minuta de documentos. Cumplido.

4.2.- DEMANDADA

-Documental:

a).- Respecto de doña NANCY ARAVENA ESPINOZA:

- 1.- Contrato a honorarios a suma alzada, de 2 de enero de 2022, suscrito por la demandante y Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, para el periodo 1 de enero de 2022 a 31 de enero de 2022.
- 2.- Contrato a honorarios a suma alzada, de 1 de marzo de 2022, suscrito por la demandante y Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, para el periodo 1 de febrero de 2022 a 31 de marzo de 2022.
- 3.- Contrato a honorarios a suma alzada, de 7 de marzo de 2022, suscrito por la demandante y Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, para el periodo 1 de abril de 2022 a 31 de octubre de 2022.
- 4.- Boletas de Honorarios emitidas por la actora correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2022.
- 5.- Informes de Gestión del Programa Inversión en la Comunidad confeccionados por doña Nancy Aravena, correspondientes a los meses de enero a abril de 2022, ambos inclusive.

b).- Respecto de don PATRICIO CAMPOS ZAPATA:

- 1.- Contrato a honorarios a suma alzada, de 2 de enero de 2022, suscrito por el demandante y Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, para el periodo 1 de enero de 2022 a 31 de enero de 2022.
- 2.- Contrato a honorarios a suma alzada, de 1 de marzo de 2022, suscrito por el demandante y Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, para el periodo 1 de febrero de 2022 a 31 de marzo de 2022.
- 3.- Contrato a honorarios a suma alzada, de 7 de marzo de 2022, suscrito por el demandante y Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, para el periodo 1 de abril de 2022 a 31 de octubre de 2022.
- 4.- Boletas de Honorarios emitidas por el actor correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2022.
- 5.- Informes de Gestión del Programa Inversión en la Comunidad confeccionados por don Patricio Campos Zapata, correspondientes a los meses de enero a abril de 2022, ambos inclusive.

c).- Respecto de don IVAN FREIRE SUAZO:

- 1.- Contrato a honorarios a suma alzada, de 2 de enero de 2022, suscrito por el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

demandante y Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, para el periodo 1 de enero de 2022 a 31 de enero de 2022.

2.- Contrato a honorarios a suma alzada, de 1 de marzo de 2022, suscrito por el demandante y Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, para el periodo 1 de febrero de 2022 a 31 de marzo de 2022.

3.- Contrato a honorarios a suma alzada, de 7 de marzo de 2022, suscrito por el demandante y Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, para el periodo 1 de abril de 2022 a 31 de octubre de 2022.

4.- Boletas de Honorarios emitidas por el actor correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2022.

5.- Informes de Gestión del Programa Inversión en la Comunidad confeccionados por don Iván Freire, correspondientes a los meses de enero a abril de 2022, ambos inclusive.

6.- Cartas de 25 de abril de 2022, de la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío, remitida a cada uno de los actores de autos, mediante la cual comunican el término anticipado del último convenio a honorarios a suma alzada.

7.- Decreto Exento N° 13 de 21 de enero de 2022 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que transfiere recursos a la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío para financiar gastos de administración y personal del programa Inversión en la Comunidad.

-Testimonial:

Declararon bajo juramento y/o promesa de decir verdad en la audiencia de juicio los siguientes testigos:

1.- Don Julio Torres Moraga. RUT: 9.838.408-1.

2.- Doña Geraldine Lorena Torres Gutiérrez, Rut 16.328.130-9.

La declaración íntegra de los testigos consta en el respectivo registro de audio de la audiencia de juicio.

II.- EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE FALTA DE LEGITIMIDAD PASIVA Y ACTIVA

Se trata de una alegación de fondo más que de una excepción y apunta precisamente a las calidades de empleador y trabajador que habilitaría a las partes para ser sujetos de esta relación procesal en calidad de demandante y demandada respectivamente.

Esto precisamente dice relación con lo que se discute en este juicio, que es la naturaleza de la relación contractual que unía a las partes, lo que debe resolverse en el fondo, por lo que esta alegación debe ser necesariamente



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

desestimada.

III.- NATURALEZA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE LAS PARTES

1.- Planteamiento de la cuestión

En primer término corresponde definir el marco regulatorio de la relación contractual que unía a las partes, pues ello tiene implicancias para determinar las consecuencias de las acciones incoadas por el actor y las prestaciones que reclama.

En síntesis los demandantes están alegando la existencia de una informalidad laboral, dado que su contratación, esto es, prestación de servicios a honorarios, excedería el marco normativo que autoriza a los órganos del Estado a contratar bajo esa modalidad según lo prescrito en el artículo 11 del Estatuto Administrativo para Empleados Públicos, y por mandato del artículo 1° con relación al 7° y 8° del Código del Trabajo y en virtud del principio de primacía de la realidad, su relación laboral debería calificarse como una desarrollada bajo subordinación y dependencia en los términos regulados en dicho cuerpo de leyes.

Por su parte el Servicio se defiende sosteniendo que no se habría excedido dicho marco normativo, pues los demandantes habrían sido contratados para la realización de un cometido específico que se habrían concretado en funciones dentro de programas y/o convenios específicos con otras reparticiones públicas. Agregando que en ningún caso se podría haber contratado por las normas del Código del Trabajo por mandato del principio de legalidad, el principio de legalidad competencial y legalidad del gasto, según lo ya resumido en el párrafo I N°2 del presente fallo, y en todo caso por aplicación de la teoría de los actos propios, los demandantes habrían consentido en tal modalidad contractual no pudiendo ahora alegar lo contrario. Y el término de la misma el 30 de abril de 2022 sería precisamente por lo estipulado en las propias cláusulas del contrato de prestación de servicios.

2.- Relación de subordinación y dependencia

Los actores han sostenido que los servicios que prestaron a honorarios para la demandada encubren una relación bajo subordinación y dependencia regida por el Código del Trabajo. Para tal efecto, deberán probar los elementos que configuran una relación contractual en tales términos.

Al efecto, hay que recordar que el artículo 7° del Código del Trabajo dispone que el contrato de trabajo es una convención mediante la cual



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

empleador y trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo ***dependencia y subordinación*** del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.

Por su parte, el artículo 8° del mismo cuerpo legal dispone que toda prestación de servicios en dichos términos, hace presumir la existencia del contrato de trabajo.

Asimismo, el artículo 9° señala que el contrato de trabajo es consensual y deberá constar por escrito en los plazos que indica, agregando su inciso 2° que el empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro de los plazos respectivos será sancionado con la multa que indica y en su inciso 4° señala que la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declara el trabajador.

Al tenor de las normas citadas precedentemente, lo que ha dicho la doctrina y también ha resuelto la jurisprudencia laboral, *“es requisito esencial para calificar una prestación de servicios personales de carácter laboral, la presencia del elemento subordinación”*. Por cierto también deberán concurrir los demás elementos de toda convención, consentimiento exento de vicios, capacidad de las partes, objeto y causa lícita, y en su caso las formalidades exigidas para cierto tipo de contratos.

Así Gamonal dice que el elemento que caracteriza a un contrato de trabajo es precisamente la subordinación, toda vez que la relación laboral es una relación de poder, siendo aquella la expresión del poder del empleador por sobre el trabajador. Se trataría de “una sujeción personal del trabajador, en la actividad laborativa, en su fase de ejecución, dentro de la organización técnico productiva de la empresa, a las directivas, normas y disciplina del empleador, a fin de que sólo incorpore su acción a las tareas específicas que le señala éste bajo sus poderes técnico empresariales”¹

De acuerdo al autor citado los elementos constitutivos de la subordinación serían la dependencia personal y la inserción del trabajador en la estructura organizacional de la empresa.

El primero, dice relación con la sujeción del trabajador al poder directivo del empleador en lo referente al lugar de trabajo, el tiempo y modalidad de la prestación. Mientras que el segundo dice relación con la utilización de los medios e instrumentos que el empleador pone a disposición del trabajador y como se inserta la prestación en la estructura de la empresa.

¹ Gamonal, S. y Guidi, C.: “Manual del Contrato de Trabajo”; Legal Publishing; Santiago, 2012; pág. 31.



Agrega que la determinación de este elemento constitutivo de la relación laboral estaría dada por un conjunto de indicios, entendiendo por tal, los factores reveladores de la posición de dependencia del trabajador respecto del empleador, cuya concurrencia permitiría calificar el vínculo jurídico como laboral.

En el caso de Chile, tanto la jurisprudencia judicial como la administrativa se han encargado de concretizar tales indicios o factores, los que se pueden sistematizar en tres categorías: a) *obligaciones de puesta a disposición*, tales como control de asistencia, cumplimiento de horario, cumplimiento de instrucciones y órdenes, permanencia en la sede empresarial, continuidad en la prestación de servicios, solicitar autorización para ausentarse de las labores, exclusividad de los servicios, entre otros; b) *Obligaciones de fiscalización*, supervisión directa, dependencia jerárquica, pedir o dar cuenta, vigilancia por parte del empleador, dirección y control del trabajo, sujeción a régimen disciplinario; y c) *Obligaciones de coordinación y producción*, fijación del marco disciplinario, control directo y pleno de la planificación y modalidad productiva, ajenidad de la prestación de los servicios y exclusividad de los mismos.

No sería necesario que se dieran todos estos factores, incluso bastaría la concurrencia de uno de ellos para calificar la relación contractual de laboral.

La doctrina anterior se ha plasmado, en diferentes fallos dictados por vía de Unificación de Jurisprudencia por la Corte Suprema, en todos ellos se hace referencia a una serie de factores que concurrían en la relación contractual y que permitirían calificar jurídicamente la relación contractual entre trabajador y empleador. La doctrina uniforme que se aprecia en dichos fallos se refleja en el siguiente considerando que se repite en todas y cada una de dichas sentencias, “....*Para precisar, pues, si estamos en presencia de un contrato de trabajo, será esencial desentrañar si concurre o no subordinación de parte del trabajador, puesto que éste es en definitiva el elemento caracterizador y ello puede –y suele– hacerse a través de un sistema de indicios, que orientan en el sentido de entender que existe esa dependencia o sujeción en la relación de trabajo, tales como obligación de asistencia, cumplimiento de horario, sometimiento a instrucciones y directivas del empleador, prestación de servicios en forma continua y permanente, estar sometido a supervigilancia y control. Es por eso que, aun cuando no se escribiera un contrato de trabajo o se celebre bajo una denominación distinta, debe aplicarse la presunción establecida en el artículo 8°*



del Código del Trabajo... Cierra el círculo, lo dispuesto en el artículo 1° de dicho cuerpo legal, que deja bajo regulación del referido estatuto normativo toda relación laboral, lo que constituye la regla general en el campo de las relaciones de trabajo.”²

Por su parte la Dirección del Trabajo ha señalado que la existencia de un contrato de trabajo debe evidenciarse por ciertos hechos y circunstancias concretas y comprobables, las que precisa en el dictamen N°5299/0249 de fecha 14 de septiembre de 1992, allí indica los mismos indicios o factores que se han indicado precedentemente.

3.- Existencia de subordinación en el caso sub lite.

Al respecto, los demandantes rindieron prueba documental consistente en copias de los contratos de prestación de servicios a suma alzada y las resoluciones administrativas que aprueban dichos contratos; todos ellos en forma consecutiva desde el inicio de la prestación hasta la fecha de término anticipado de la misma, acaecida el 30 de abril de 2022 para los tres profesionales. Estos documentos se suscribieron en forma sucesiva sin solución de continuidad desde el inicio al término de la misma. También se solicitó exhibir dichos documentos, lo que la demandada cumplió parcialmente.

De igual forma se incorporaron las boletas de honorarios emitidas mensualmente por los demandantes durante el tiempo que duró la prestación de los servicios y de igual forma copia de los Informes Mensuales de emitidos por los demandantes y aprobados por su jefatura directa, y que eran el antecedente de emisión de la boleta y el pago mensual del respectivo “honorario”.

Se exhibió a petición de la demandante copia del Registro de Asistencia de los demandantes por parte del período que prestaron servicios.

Todos estos documentos dan cuenta de una relación de trabajo con la demandada en forma permanente y continua, desarrollando las funciones de que dan cuenta las cláusulas de los respectivos contratos de prestación de servicios³, esto es, las de fiscalizador o fiscalizadora de la ejecución de los

² Ver sentencias dictadas en los roles 11.584/2014; 1.496/2015; 5.699/2015; 7.091/2015; 8002/2015; 8008/2015; 6.870/2016 y 38.264/2016 todos de la Exma. Corte Suprema. Los últimos referidos en concreto a una controversia similar a la de autos.

³ En la cláusula segunda de los respectivos contratos de prestación de servicios a suma alzada se estipula lo siguiente: “...prestará servicios de asesoría para la realización de las tareas específicas y la obtención de los siguientes productos: *Deberá prestar asesorías en las labores de supervisión de los proyectos en terreno, en la comunicación y coordinación con las Unidades Ejecutoras y actores del Programa Inversión en la Comunidad administrado por la Intendencia Regional del Bío Bío [hoy Delegación Presidencial de la Región del Bío Bío]; *Además deberá dar cumplimiento a las metas y objetivos de supervisión indicado por la Coordinación Regional, en la elaboración de informes técnicos,



proyectos en el marco del Programa de Inversión en la Comunidad.

Hay que tener presente que el denominado “Programa de Inversión en la Comunidad” es de responsabilidad del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, específicamente de la Subsecretaría del Trabajo y su Unidad Pro-Empleo. El Programa se enmarca dentro de la política de promoción de oportunidades laborales para las personas pertenecientes a los sectores económicamente más vulnerables, otorgando una fuente laboral en aquellos lugares que estén experimentando alto desempleo o una contracción de la demanda por mano de obra a raíz de alguna contingencia, ya sea de tipo económica, ambientales o bien que hayan sufrido algún desastre natural. El Programa se origina el año 2001 como una medida de política pública para paliar el alto nivel de desempleo que experimentó el país producto de la Crisis Asiática. Si bien, ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, dada su naturaleza de enfrentar contingencias de empleo, sigue vigente y no tiene fecha de término. Además, tiene alcance nacional.⁴

Por su parte, el Decreto N°1 de fecha 5 de enero de 2010 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que estableció las reglas administrativas que se aplican al financiamiento de proyectos de mano de obra intensiva en el ámbito local, dispone dos líneas de acción: “transferencia directa de recursos” y “Ejecución de proyectos mediante convenios”. En la primera línea de acción, la Subsecretaría del Trabajo asigna recursos a las Intendencias y a partir de 2021, a las Delegaciones Presidenciales para que ejecuten proyectos en las Regiones, sea en que se ejecuten directamente o a través de convenios con organismos públicos o agentes privados, para beneficiar a las personas que cumplan los requisitos establecidos en la normativa que regula y reglamenta el Programa.

La determinación y ejecución de las obras financiadas por este Programa lleva décadas de funcionamiento, incluso pudiendo retrotraer sus orígenes a la época de la dictadura militar que gobernó el país, con los denominados Programa de Empleo Mínimo (PEM) y que luego pasó a llamarse Programa de Ocupación de Jefes de Hogar (POJH), creada en octubre de 1982, y que actualmente se llaman Programas Proempleo, operan a través de la suscripción de contratos de trabajo a los beneficiarios del mismo, a diferencia de los antecesores programas que excluían de los efectos de una relación laboral

sistematización de las actividades realizadas, manteniendo toda la documentación e instrumentos debidamente archivados y al día.” Lo mismo se mantiene en los contratos de prestación de servicios suscritos con la Delegación Presidencial. En los hechos, las funciones de los demandantes consistían en la fiscalización de la ejecución en terreno de los proyectos en el marco del denominado Programa de Inversión en la Comunidad.

⁴ En https://www.dipres.gob.cl/597/articles-149522_informe_final.pdf; consultado el 13 de febrero de 2024.



formal. A mediados de 2019, el Ministerio procedió a traspasar la ejecución del Programa que estaba radicada en el Servicio de Capacitación y Empleo (SENCE) a las Intendencias Regionales, por el nexo directo y mayor nivel de operación que estas estructuras tenían, especialmente respecto a las Municipalidades y otros entes privados.

Mediante Decretos dictados anualmente se realiza la “transferencia de recursos para financiar gastos de administración y personal del Programa.

Acorde lo anterior, sin lugar a dudas que la ejecución de estos programas, más allá del servicios público que proporcione los recursos financieros, corresponde entonces a una tarea continua y permanente del Servicio demandado, y por cierto no responden al concepto regulado en el artículo 11 de la Ley 18.834, esto es, “labores accidentales y que no sean las habituales de la institución”.

De igual forma, las funciones desempeñadas por los actores tampoco corresponden a “cometidos específicos”, por cuanto el contrato de prestación de servicios se mantuvo en forma permanente en el tiempo y sin solución de continuidad durante varios años.

Al relacionar estas funciones o tareas del Servicio con las encargadas a los demandantes, coinciden plenamente, en consecuencia estas funciones van más allá de los cometidos específicos que autoriza el artículo 11 de la ley 18.834 para haber contratado a los demandantes mediante la modalidad de prestador de servicios a honorarios.

Por otro lado, hay que señalar, que en los contratos a que se hizo referencia, no obstante su titulación, se aprecian las menciones que indica el artículo 10 del Código del Trabajo, esto es, nombre de las partes, funciones para la cual fue contratada, plazo del contrato, monto de la remuneración pactada, obligaciones del trabajador y facultades del empleador.

A modo de ejemplo, en la cláusula 5° se establece que el actor debía cumplir una jornada de trabajo de 44 horas semanales, distribuidas de lunes a viernes bajo las mismas condiciones del Servicio en general, el control y registro se llevará a cabo a través de los procedimientos establecidos para todo el personal; en la cláusula 6° indica que los servicios serán prestados en las dependencias del Programa; en la cláusula 11 se autoriza el uso de permisos administrativos, un descanso anual de 15 días hábiles, denominado eufemísticamente en el contrato *“suspensión anual de prestaciones”*, o sea vacaciones pagadas; derecho al pago de las licencias médicas; permisos en caso de fallecimiento de ciertos parientes y nacimiento de un hijo; derechos a



capacitación por cuenta del Servicio; derecho a aguinaldos, etc.

De igual forma, los sucesivos contratos especifican en forma muy detallada las funciones que debían cumplir los demandantes, en los términos ya indicados; estas dan cuenta de una serie de acciones que van vinculadas a los objetivos del Servicio en tanto ente preocupado de propender a la promoción del empleo en la comunidad.

Asimismo, en el ejercicio de estas funciones, quedaba supeditado a las directrices del Jefe del Servicio, quien debía suscribir los informes de actividades diarias para los efectos del pago del honorario convenido.

Además, por los servicios prestados percibían un estipendio mensual, cuyo pago estaba supeditado a un informe de gestión que debía entregar mensualmente, y que debía ser visado por su jefatura directa, en la cláusula novena se indica con el nombre de “supervisión correspondiente”.

De igual forma, se contemplaba un régimen estricto de obligaciones, establecidas en cláusula 12° del contrato; régimen propio del trabajo privado bajo subordinación y dependencia y que da cuenta la facultad de dirección y mando del empleador.

O sea, los demandantes no eran libres de desarrollar el servicio para el cual habían sido contratados, debían ceñirse a los requerimientos e instrucciones de un superior jerárquico y debían cumplir no solo las estipulaciones del contrato en el programa respectivo, sino otras de carácter general que emanaban de las autoridades del mismo servicio, y estaba sujeto al cumplimiento de una jornada de trabajo y un régimen de control de sus asistencia.

La mera mención que hace en el contrato de ser uno a “honorarios a suma alzada”, con la que pretende negar la existencia de una relación laboral bajo subordinación y dependencia, no obsta a lo ya indicado, puesto que se contradice con el texto del mismo contrato, en los términos ya indicados, y tal referencia debe ser interpretada en su contexto y en función de las demás normas del contrato y en vista de la ejecución práctica de la prestación, por lo que no puede atenerse a ella para restringir los derechos y obligaciones que emanan de la convención, teniendo en cuenta además, que los contratos deben ser interpretados de buena fe, obligando no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, lo anterior haciendo una interpretación sistemática en clave laboral de lo preceptuado en los artículos 23, 1545, 1546 y 1564 del Código Civil, aplicables al caso de autos en virtud de las reglas generales.



Por otro lado, los demandantes también incorporaron prueba testimonial, declarando en estrados los testigos Marisol Carmen Inostroza Muñoz, Hernán Alonso Cannobbio Beltrán y Primo Antonio Heredia Ruiz, quienes legalmente juramentados y dando razón suficiente de sus dichos, señalan que los actores debían cumplir órdenes de sus jefaturas directas, cumplir un horario que era general para el servicio, había un registro escrito del control de la asistencia especialmente habilitado para los funcionarios a honorarios; si no se cumplía con esta jornada de trabajo estaba sujeto a reprimendas del jefe del Servicio y descuentos de remuneraciones. Desempeñaban estas funciones en dependencias del Servicio arrendadas por éste al efecto y poseían un puesto de trabajo; las tareas eran desempeñadas tanto en estas dependencias como en terreno visitando el lugar de ejecución de los proyectos para supervisar el cumplimiento de los objetivos del Programa en cuestión. También debían cumplir un horario igual al que cumplen los funcionarios a contrata o de planta del Servicio y debían registrar su asistencia.

Por su parte, los testigos de la demandada no contrvirtieron sustancialmente el testimonio anterior, si bien se intentó por cierto desvirtuar la calidad de la prestación de los servicios de los demandantes, pero dado los antecedentes que se incorporaron en la audiencia de juicio eso no resultó efectivo, y es más, corroboraron la tesis de los actores, en orden a las funciones que desempeñaban, las circunstancias de haber cumplido una jornada de trabajo, registrar su asistencia y cumplir las instrucciones del Jefe del Servicio.

También a objeto de calificar la naturaleza de la relación contractual de las partes, hay que tener presente el principio de primacía de la realidad, propio del derecho del trabajo, por cuanto existiendo contradicción con lo que dicen los documentos y lo que indica la realidad, habrá que estarse a ésta.

En efecto, la prestación de los servicios se hizo en una modalidad propia de una relación bajo subordinación y dependencia, ya que los demandantes estaban sujetos al cumplimiento de un tiempo determinado que debían permanecer en las dependencias del Servicio habilitadas al efecto y pagadas con dinero del Programa en un horario determinado, que puede ser calificado sin mayores ambages como jornada de trabajo, y debía seguir las instrucciones que recibían de sus superiores; debían ejecutar sus funciones en la forma como se indicaba en su contrato y en las disposiciones del Programa al cual estaban adscritos y debía rendir cuenta de las mismas, según se aprecia en la prueba documental consistente en copias de los Informes Mensuales elaborados por los demandantes para el pago de su estipendio mensual. Estos informes dan cuenta



en forma detallada de las tareas específicas que habían realizado en el mes respectivo. Y, más encima, debían registrar diariamente su asistencia, cuyo registro se incorporó en la audiencia de juicio mediante la exhibición que hiciera del mismo la demandada a petición de los demandantes, aunque se hizo en forma parcial, da cuenta que la prestación estaba sujeta al cumplimiento de una asistencia diaria. No se entiende entonces como si los prestadores de servicios estaban sujetos a normas propias del derecho civil, para ejecutar los servicios contratados tenían que rendir cuenta de los mismos mediante estos informes.

En consecuencia, en caso alguno estamos en presencia de la ejecución de una prestación de servicios en los términos del arrendamiento de servicios, regulado en los artículos 2006 a 2012 del Código Civil, como lo pretende la demandada. Los demandantes no tenían la libertad de ejecutar los servicios del modo que a ellos le pareciera, sino por el contrario de la forma y modo que lo determinaba su empleador.

Otro indicador de la subordinación y dependencia de los servicios prestados lo constituyen las boletas de honorarios emitidas por los demandantes mes a mes durante toda la relación laboral, que eran además exclusivas para el Servicio, según se desprende del correlativo de las mismas boletas, las que se acompañaron en la audiencia de juicio, lo que es indicador de que los actores sólo prestaba servicios para la demandada. Esto unido a los respectivos informes de gestión, que también eran elaborados y visados por su jefatura directa en forma mensual, permiten concluir que esta prestación de servicios fue continua y exclusiva en el tiempo, lo que contradice la tesis de la demandada en orden a que esta prestación de servicios era un simple arrendamiento de servicios.

Apreciada la prueba rendida por la demandada para desvirtuar la pretensión de los demandantes en orden a no tener por acreditada la existencia de la relación laboral bajo subordinación y dependencia, no logra crear la convicción contraria, sino que la reafirma en los términos ya indicados.

En efecto, la documental es prácticamente la misma que rindieron los actores, la que ya se analizó, y en cuanto a la testimonial, ella corrobora los dichos de aquellos y lo señalado por los testigos Julio Torres Moraga y Geraldine Lorena Torres Gutiérrez, no contravirtieron lo sustancial de lo indicado por los testigos de los demandantes.

La demandada tampoco obtuvo la confesional a su favor, toda vez que renunció a este medio de prueba.



Dado los antecedentes expuestos, es dable concluir que la prestación de servicios de los demandantes que se ocultaba en un aparente arrendamiento de servicios encubría más bien una relación bajo subordinación y dependencia en los términos indicados en el artículo 7° del Código del Trabajo y en consecuencia debe presumirse tal calidad, según lo prescrito en el artículo 8° inciso primero del mismo cuerpo legal, y consecuentemente le son aplicables las normas del Código del Trabajo.

4.- Prestación de servicios más allá de lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley 18.834

La demandada ha sostenido que la relación contractual que la unía con los actores se sustentaría en lo prescrito en el artículo 11° de la ley 18.834 que establece:

“...Podrá contratarse, sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales. Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

Son dos las hipótesis que regula la norma en comento. La primera, que dice “podrán contratar profesionales bajo la modalidad de honorarios”, cuando se trate de “labores accidentales” y que “no sean las habituales” del Servicio que se trate. En cuyo caso, dicha prestación de servicios se regiría por el respectivo convenio y supletoriamente por las normas del Código Civil relativas al arrendamiento de servicios, y de ser así, evidentemente el Juzgado del Trabajo no sería competente para conocer de la controversia que se suscitara con ocasión de la aplicación de las respectivas normas del convenio, sino uno de competencia civil.



El artículo citado no define que se entiende por labores accidentales y no habituales. Acorde lo prescrito en el artículo 20 del Código Civil deberemos entonces recurrir al sentido natural y obvio de dichas palabras, que según la asentada jurisprudencia de la Exma. Corte Suprema la da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En él se indica que accidental proviene de la expresión latina *accidentālis*; adjetivo que se define como "no esencial", "casual", "contingente"; dicho de un cargo: "que se desempeña con carácter provisional. Por su parte, la expresión "habitual", proviene del latín *habitualis*, derivado del latín *habitus* 'hábito'; la define como que se hace, padece o posee con continuación o por hábito. Por lo que antepuesta la expresión "no", daría cuenta de lo contrario, es decir, algo que se hace, padece o posee sin continuidad, es decir no en forma permanente.

Es decir, acorde la norma transcrita, la institución respectiva, en el caso de autos, la Delegación Presidencial de la Región del Bío Bío, antes Intendencia Regional estaría autorizada a contratar servicios de profesionales bajo la modalidad de honorarios o "arrendamiento de servicios", aquellas labores no esenciales, casuales, contingentes o en forma provisional, y que no sean de aquellas que en función de sus propósitos y fines se efectúen sin continuidad. En consecuencia, para determinar la competencia del tribunal por esta vía, habrá que analizar si la prestación de servicios que ejecutaban los demandantes para la demandada es de aquellas que contempla la norma, es decir, si se trata de servicios accidentales o no habituales y/o de cometidos específicos.

Al respecto la propia prueba de la demandada, consistente en documental y testimonial, dan cuenta del aserto contrario, esto es, que la prestación de servicios de los demandantes en modo alguno fue de carácter accidental y que no hayan tenido relación con las actividades habituales del Servicio.

Así, la documental consistente en las resoluciones de aprobación de los respectivos contratos de prestación de servicios, dan cuenta que éstos fueron prestados en forma continua desde la fecha de la contratación de cada uno de los demandantes⁵ hasta la fecha del término de la contratación, en forma ininterrumpida y sin solución de continuidad; por su parte, los servicios contratados dicen relación con tareas propias del Servicio, en el caso sub lite, la Delegación Presidencial (Ex Intendencia Regional del Bío Bío), en el ámbito de la ejecución del Programa de Inversión en la Comunidad, en los términos ya expuestos en el párrafo precedente. Lo que no fue desvirtuado con la prueba

⁵ En el caso de doña Nancy Aravena Espinoza a partir del 1 de mayo de 2018; respecto de don Patricio Campos Zapata, a partir del 22 de mayo de 2018 y de don Iván Freire Suazo, a partir del 1 de agosto de 2019.



rendida por la demandada.

En efecto, la documental es prácticamente la misma que incorporaron los demandantes y habrá que estarse a la valoración que se ha hecho ella.

En cuanto a la testimonial rendida por la demandada, tampoco contravirtió sustancialmente lo ya indicado, por cuanto de su testimonio se desprende que efectivamente hubo una continuidad en la prestación de los servicios, y más bien sus dichos tienden a desvirtuar la naturaleza de los mismos, en orden a la subordinación y dependencia, aunque dieron cada uno de ellos los indicadores de laboralidad ya mencionados.

Tratándose en consecuencia de una labor no accidental, sino más bien permanente y sostenida en el tiempo, no estamos en presencia de la hipótesis que autoriza el artículo 11° de la Ley 18.834 para contratar al actor bajo la figura de un contrato de arrendamiento de servicios a honorarios.

Tampoco la prestación de servicios se trataría de cometidos específicos, por la forma y tiempo en que estos fueron desarrollados.

Así las cosas, no encuadrándose la prestación de servicios ejecutada por los demandantes en la hipótesis de excepción del artículo 11° precedentemente citado, no siendo tampoco funcionarios a contrata ni tampoco de planta del Servicio, corresponde que se aplique el estatuto jurídico común para toda prestación de servicios que no se rija por un estatuto especial, según lo prescrito en el artículo 1° del Código del Trabajo.

Así ha sido resuelto por la Exma. Corte Suprema en fallos reiterados vía unificación, y cuya doctrina se puede verificar en la siguiente cita "...Que esta materia de derecho ya fue conocida por esta Corte y unificada mediante sentencias dictadas en las causas roles ingreso Corte N°1496-2015, 5.699-2015 y 7091-2015, las que establecieron *"Que la acertada interpretación del artículo 1° del Código del Trabajo, en relación, en este caso, con el artículo 4° de la Ley N°18.883, está dada por la vigencia de dicho cuerpo legal para las personas naturales contratadas por la Administración del Estado; en la especie una repartición del Estado, que aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírsele el estatuto especial que regula a la entidad contratante, prestan servicios en las condiciones previstas por el Código del ramo. En otros términos, corresponde calificar como vinculaciones laborales, sometidas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del*



Estado, en la especie, una Municipalidad, en la medida que dichas vinculaciones se desarrollen fuera del marco legal que establece –para el caso el artículo 4° de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación sobre la base de honorarios ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente.”⁶

Por último, hay que tener presente que es en estos casos cuando cobra sentido el fin tutelar del derecho del trabajo, a través del principio protector, puesto que desde sus inicios esta rama del derecho busca dar protección a la parte más débil del contrato de trabajo, el obrero, el empleado, el asalariado, frente al empleador dueño de los medios de producción dada la relación de poder asimétrica que existe entre ambos (en el caso sub lite la Secretaría Ministerial de Justicia); aquí el principio de libertad contractual del derecho privado cede en beneficio de éste último.

Es por ello que el profesor Gamonal dice “el principio de protección es también conocido como principio tuitivo, proteccionista o de favor y se fundamenta en la falta de libertad inicial y consecuente del trabajador. Esta carencia de libertad –por la necesidad de trabajar la causa inmediata de la desigualdad de los empleados y explica la protección del derecho del trabajo.”⁷

De allí que el legislador de nuestro Código del Trabajo ha establecido una serie de medidas para mitigar este desequilibrio de poderes que se da al interior del contrato de trabajo, estableciendo, entre otras, una serie de presunciones legales que favorecen al trabajador, un régimen indemnizatorio mínimo, un conjunto de derechos irrenunciables, un procedimiento especial para tutelar los derechos fundamentales del trabajador, un sistema probatorio a base de la prueba de indicios en dicho procedimiento, etc. En virtud de este principio es que el derecho del Trabajo no puede amparar la existencia de trabajadores de primera y segunda clase, dada la precariedad laboral de los funcionarios de los órganos del Estado que se desempeñan en modalidad de honorarios al margen de los casos en que la ley lo permite. Más aún cuando se trata de trabajadores que se han desempeñado por largos años, como es el caso de la demandante, desde el año 2014 en adelante. Ello además, en virtud del mandato Constitucional consignado en los artículos 1° y 19 N°2 de la Carta

⁶ Exma. Corte Suprema, sentencia dictada en fallo de unificación de jurisprudencia Rol 38.264/2016 dictada el 28 de septiembre de 2016; considerando 4°.

⁷ **GAMONAL, Sergio:** “El principio de protección del trabajador en la Constitución chilena”; en Estudios Constitucionales, año 11, N°1, 2013; pp. 425-458; Centro de Estudios Constitucionales de Chile.



Fundamental de 1980.

En consecuencia, a juicio de este sentenciador ha quedado acreditado el hecho que la prestación de los servicios se hizo bajo subordinación y dependencia desde la fecha de la primera contratación hasta el término anticipado del último contrato de prestación de servicios, esto es, el 30 de abril de 2022 en razón de que la prestación de servicios excede a las facultades otorgada al servicio en el artículo 11° de la ley 18.834, corresponde aplicar el estatuto común, que es, el Código del Trabajo según lo prescrito en el artículo 1° del mismo cuerpo legal.

Lo anterior implica, en consecuencia revisar si la decisión de la demandada se ajusta a la normativa legal vigente en lo que respecta al cese de las funciones de los demandantes, tanto en lo se refiere al cumplimiento de las formalidades como de los aspectos sustantivos, que es lo que se analizará en el acápite siguiente.

5.- En cuanto al despido y su justificación

Asentado que ha sido la existencia de una relación contractual bajo subordinación y dependencia corresponde analizar la justificación del despido de que fueron objetos los demandantes.

Al respecto, resulta un hecho pacífico la circunstancia de que los demandantes cesaron su prestación de servicios en forma anticipada el 30 de abril de 2022; consta además en copia de las respectivas cartas certificadas en las que se les comunica el término anticipado, la que fue datada el 25 de abril de 2022, despachada el 26 de abril, cuyo contenido es el mismo para todos los demandantes y cuyo tenor es: *“...que se ha decidido prescindir de sus servicios como asesor en la Delegación Presidencial Regional del Biobío, a partir del próximo 30 de abril de 2022...”*.

Sin perjuicio de ello, correspondía a la demandada acreditar la justificación o procedencia del término anticipado de la prestación de los servicios.

Para ello se requería analizar los hechos en que se funda la desvinculación, esto es, el aviso que debía haber remitido a los trabajadores cumpliendo así lo prescrito en el artículo 162 del Código del Trabajo, lo que en el caso de autos no ha sucedido, razón por la cual por esta sola circunstancia debería declararse injustificado el despido, al no existir causal legal invocada por la demandada.



Así se ha resuelto en forma reiterada por la jurisprudencia, toda vez que la carta de despido constituye una verdadera demanda que fija la competencia del tribunal para pronunciarse sobre la procedencia y justificación del mismo. Admitir lo contrario sería dejar en la indefensión al trabajador, ya que no puede controvertir los hechos en que se funda su desvinculación, porque en la práctica no hay hechos al no haberse comunicado el despido en la forma prescrita por el legislador.

Se ha señalado también por la jurisprudencia que el demandado no puede invocar otros hechos que los señalados en la carta de despido, lo que tiene sustento en el mismo artículo 162 citado en su inciso 1° con relación al artículo 454 inciso 2° parte final, ambos del Código del Trabajo.

De allí que la demandada no podía en la contestación incorporar los hechos fundantes de su decisión de desvincular a los trabajadores ni menos pretender rendir prueba al respecto, sino no lo hizo en el respectivo aviso de despido.

En cuanto a la notificación aludida, no cumple con el estándar establecido en el artículo 162 del Código del Trabajo, pues no se invoca causal legal alguna, y en cuanto a los hechos, ellos son de carácter genérico que impiden la adecuada defensa de los trabajadores.

Entonces, no cabe más que concluir que el despido de que fueron objeto los trabajadores demandantes a partir del 30 de abril de 2022, resulta ser injustificado.

6.- Contrato de naturaleza indefinida

Y dado el tiempo laborado, estamos en frente de un contrato de naturaleza indefinida, pues el legislador sólo permite la contratación a plazo en los términos indicados en el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo, situándose el actor en el caso regulado en el inciso 2° del citado número.

Por todas estas consideraciones, es que corresponde acoger la demanda de los actores en los términos que se indicará en la parte resolutive, desechando las alegaciones de la demandada en todas sus partes, especialmente la que dice relación con la falta de legitimidad activa y pasiva, respectivamente.

IV.- PROCEDENCIA DE APLICAR LA SANCIÓN DEL ARTÍCULO 162 INCISO 5° DEL CODIGO DEL TRABAJO

Es un hecho pacífico la circunstancia de que durante la relación laboral no



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

se pagaron cotizaciones previsionales, tal como se indicó precedentemente.

Por otro lado, siendo carga del demandado acreditar el pago de las citadas cotizaciones, al tenor de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil, y no habiendo rendido prueba alguna al respecto, habrá que acoger la citada pretensión de los demandantes, toda vez que habiendo sido el despido el día 30 de abril de 2022, correspondía que se pagaran las cotizaciones, lo que no se hizo.

La circunstancia que sea en esta sentencia que se declare la existencia de una relación laboral bajo subordinación y dependencia, no obsta a acoger dicha pretensión, toda vez que se no se trata de una sentencia constitutiva sino declarativa, que reconoce derechos pre existentes de la demandante y, habiendo sido obligación del empleador retener el monto respectivo de la remuneración de la trabajadora para pagar las cotizaciones a que da lugar el contrato de trabajo, y no lo hizo, es necesario así establecerlo.

Así se ha resuelto en forma reiterada en el último tiempo por la jurisprudencia del Corte Suprema en fallos de unificación, siendo la reiterada doctrina la siguiente *“Que, para los fines de asentar la recta exégesis en la materia, debe tenerse presente, además, lo ya resuelto por esta Corte en los autos rol número 9.690-15, 40.560-16 y 76.274-16 y más recientemente en los autos ingreso número 100.842-16 y 3.618-17, en las que se dictó sentencia con fecha 22 de mayo último, y cuyos razonamientos se comparten, en cuanto concluyen que es procedente la sanción de nulidad del despido cuando es la sentencia del grado la que reconoce y declara la existencia de la relación laboral, porque, conforme indican: “la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y ésta se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos y al no cumplir con esta exigencia se hace acreedor de la sanción establecida en el artículo 162, incisos 5°, 6° y 7°, del Código del Trabajo”, y se precisa que la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral de las partes: “no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador*



desde la misma época ..., en que las partes la constituyeron.”⁸

Si bien es cierto que la Cuarta Sala de la Corte Suprema ha emitido en último tiempo algunos fallos que contravienen la doctrina que había sostenido en forma reiterada desde algún tiempo a esta parte, no es menos cierto que dicha doctrina no es unánime, y teniendo en cuenta los principios del derecho laboral, especialmente el principio protector, deberá estarse a la doctrina que sea más favorable al trabajador, en el caso sub lite, la ya expresada en los fallos precedentemente citados.

Además, hay que dejar constancia en este fallo, que los órganos de la administración no pueden quedar al margen de esta obligación legal, porque no puede haber trabajadores de primera o segunda categoría, en atención al mandato constitucional contenido en los artículos 1° y 19 N°2 de la Carta Fundamental. Dejar de aplicar esta norma a los órganos del Estado, en cuyo caso se encuentra la Delegación Presidencial de la Región del Bío Bío, sería amparar una discriminación arbitraria, doble, por un lado desde la perspectiva de los trabajadores y por el otro, desde la perspectiva de los empleadores, ya que se les mediría con rasero más estricto que el aplicado a los órganos del estado, sin que existiere una justificación proporcional que la ampare dicha medida.

Por lo anterior corresponde acoger esta pretensión en toda su extensión, aplicando la sanción del artículo 162 incisos 5° y 6° del Código del Trabajo.

V.- OTRAS ALEGACIONES DE LA DEMANDADA

Tampoco la demandada se puede amparar en el principio de legalidad que emana de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República para justificar un acto que resulta evidentemente contrario a las normas de orden público del Código del Trabajo y de la propia Carta Fundamental en sus artículos 1° y 19 N°2 y 16, a su propio estatuto jurídico al contratar a la actora al margen de lo establecido en el artículo 11° de la Ley 18.834, tal como latamente se ha desarrollado en este fallo, dando por reproducidos los citados argumentos.

VI.- PRESTACIONES DEMANDADAS

1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo

Acorde lo razonado en los párrafos precedentes, y dado que se acogerá la demanda por despido injustificado, corresponde que la demandada pague esta

⁸ CS sentencia dictada en causa rol 7.059-2017 de fecha 8 de junio de 2017, que acoge recurso de unificación de jurisprudencia.



prestación dado que se omitió cumplir con la remisión del aviso a que se refiere el artículo 162 del Código del Trabajo.

2.- Indemnización por años de servicios

Dado lo razonado precedentemente, corresponde pagar a los actores la indemnización por años de servicios, correspondiendo al afecto el pago de los años de servicios en los términos que se indicará en la parte resolutive del fallo.

Así, en el caso de Nancy Aravena Espinoza y de Patricio Campos Zapata, al haber tenido ambos una antigüedad de 4 años, la indemnización por años de servicios del artículo 163 inciso 2° del Código del Trabajo al existir servicios continuos por ese lapso de tiempo corresponde el pago de cuatro remuneraciones.

Respecto a Iván Freire Suazo, al haber tenido una antigüedad de 2 años y 9 meses, en el caso de la indemnización por años de servicios corresponde el pago de tres remuneraciones.

3.- Recargo legal de la indemnización por años de servicios

Se ha pedido el recargo legal de la indemnización por años de servicios que contempla el artículo 168 del Código del Trabajo, aumentándola en un 50%, lo que corresponde dado la falta de aviso que hace que el despido se injustificado.

4.- En cuanto al feriado

Los demandantes han solicitado el pago de feriado fijando un monto determinado en la demanda como el adeudado por concepto de feriado legal y proporcional.

La demandada no acreditó el uso de feriado legal por parte de los demandantes ni tampoco que a la fecha del despido se haya pagado la compensación por feriado proporcional, y siendo carga de ella acreditarlo, al tenor de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde acoger la demanda en lo que respecta a este ítems para cada uno de los demandantes.

5.- Base de cálculo de las prestaciones

La base de cálculo de las prestaciones es la última remuneración mensual percibida por los demandantes.

Se acreditó con las respectivas boletas de honorarios, correspondientes al



mes de abril del año 2022, acompañadas por la parte demandada como prueba documental, que la última remuneración percibida por los demandantes ascendió a la suma de \$1.109.797.

VII.- VALORACION DE LA PRUEBA

Se deja constancia que la prueba rendida por las partes de valoró acorde a las reglas de la sana crítica de conformidad a lo prescrito en el artículo 456 del Código del Trabajo.

La que no fue expresamente valorada no influye en los razonamientos y conclusiones a que se ha arribado en este fallo.

En cuanto a los apercibimientos solicitados por la parte demandantes, ellos resultan irrelevantes dado que se acogerá la demanda en los términos que se indicará en lo resolutivo, y aunque los documentos solicitados exhibir acorde lo prescrito en el artículo 453 n°5 del Código del Trabajo fueron en forma parcial, ellos resultaron suficientes para establecer la existencia de la relación laboral alegada por los demandantes.

En lo que respecta a la prueba incorporada por la demandada, ella fue valorada en su mérito y aquellos documentos que no se analizaron no aportan antecedentes que controviertan los razonamientos expuesto en la presente demanda, así es el caso de la copia del Decreto Exento N° 13 de 21 de enero de 2022 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que transfiere recursos a la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío para financiar gastos de administración y personal del programa Inversión en la Comunidad.

En lo que respecta a la prueba testimonial de la demandada consistente en la declaración de don Julio Torres y doña Geraldine Torres, fue analizada en su mérito sin que los dichos de los testigos presentados por esta parte hayan controvertido sustancialmente lo expuesto por los testigos de la parte demandante, por el contrario corroboraron la existen de la relación contractual, el tiempo trabajado, las funciones cumplidas y la modalidad de pago de sus remuneraciones, incluso señalaron que estaban sujetos al cumplimiento de metas que les imponía el Programa y debían realizar informe mensual dando cuenta de las tareas realizadas y así proceder al pago del honorario comprometido. También señalaron que si bien no estaban en las dependencias donde funciona la Delegación Presidencial, sí desempeñaban sus funciones en un inmueble arrendado para tal efecto.

La demás prueba rendida por la demandada coincide con la documental rendida por los demandantes, la que fue analizada y ponderada en su mérito en



los términos ya expuestos.

VIII.- DECISIÓN

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil; artículos 1°, 3°, 7°, 8°, 9°, 11, 22, 41, 42, 63, 67, 71, 73, 162, 163, 168, 446 a 462 del Código del Trabajo, se resuelve:

I).- Que, **SE RECHAZA** la alegación de falta de legitimidad activa y pasiva opuesta por la demandada, en todas sus partes.

II).- Que, **SE HACE** lugar a la demanda deducida por doña **NANCY ELIANA ARAVENA ESPINOZA**; don **PATRICIO ABRAHAM CAMPOS ZAPATA** y don **IVAN ANDRES FREIRE SUAZO**, en contra de su ex empleador **DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE LA REGIÓN DEL BIO BIO**, representada por el **Consejo de Defensa del Estado**, a través de su procurador fiscal don **Georgy Schubert Studer**, y en consecuencia se declara:

1°) La existencia de una relación bajo subordinación y dependencia entre las partes, en el caso de doña Nancy Aravena Espinoza desde el 1° de mayo de 2018 al 30 de abril de 2022; en el caso de don Patricio Campos Zapata desde el 22 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2022 y en el caso de don Iván Freire Suazo desde el 1° de agosto de 2019 al 30 de abril de 2022; la que se encontraba regida por el Código del Trabajo.

2°) Que, el despido de que fueron objetos los trabajadores el día 30 de abril de 2022, es injustificado.

3°) Que, consecuentemente se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones:

a).- En el caso de doña Nancy Aravena Espinoza:

i).- La suma de \$1.109.797 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

ii).- La suma de \$4.439.188 por concepto de indemnización por años de servicios (4 años).

iii).- La suma de \$2.219.594 por concepto de recargo del 50% de la indemnización anterior en virtud de no haberse esgrimido casual legal.

iv).- La suma de \$3.218.411 por concepto de feriado legal y proporcional.

v).- Deberá enterar las cotizaciones previsionales en las entidades respectivas por todo el periodo trabajado a razón de una remuneración mensual de \$1.109.797.

vi).- Las sumas ordenadas pagar lo serán con reajustes e intereses



legales correspondientes.

b).- En el caso de don Patricio Campos Zapata:

i).- La suma de \$1.109.797 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

ii).- La suma de \$4.439.188 por concepto de indemnización por años de servicios (4 años).

iii).- La suma de \$2.219.594 por concepto de recargo del 50% de la indemnización anterior en virtud de no haberse esgrimido casual legal.

iv).- La suma de \$3.181.418 por concepto de feriado legal y proporcional.

v).- Deberá enterar las cotizaciones previsionales en las entidades respectivas por todo el periodo trabajado a razón de una remuneración mensual de \$1.109.797.

vi).- Las sumas ordenadas pagar lo serán con reajustes e intereses legales correspondientes.

c).- En el caso de don Iván Freire Suazo:

i).- La suma de \$1.109.797 por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.

ii).- La suma de \$3.329.391 por concepto de indemnización por años de servicios (3 años).

iii).- La suma de \$1.664.695, por concepto de recargo del 50% de la indemnización anterior en virtud de no haberse esgrimido casual legal.

iv).- La suma de \$2.265.836 por concepto de feriado legal y proporcional.

v).- Deberá enterar las cotizaciones previsionales en las entidades respectivas por todo el periodo trabajado a razón de una remuneración mensual de \$1.109.797.

vi).- Las sumas ordenadas pagar lo serán con reajustes e intereses legales correspondientes.

III).- Que, a título de sanción por el no pago de las cotizaciones previsionales la demandada deberá seguir pagando la remuneración y demás prestaciones del contrato, a razón de \$1.109.497 mensuales hasta que se produzca la convalidación para cada uno de los trabajadores demandantes.

IV).- Que, no se condena en costas a la perdedora por haber tenido motivo plausible para litigar.

RIT O-981-2022



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT

Dictada por **ELIECER ALFONSO CAYUL GALLEGOS**, Juez Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BEBPXLPRXXT